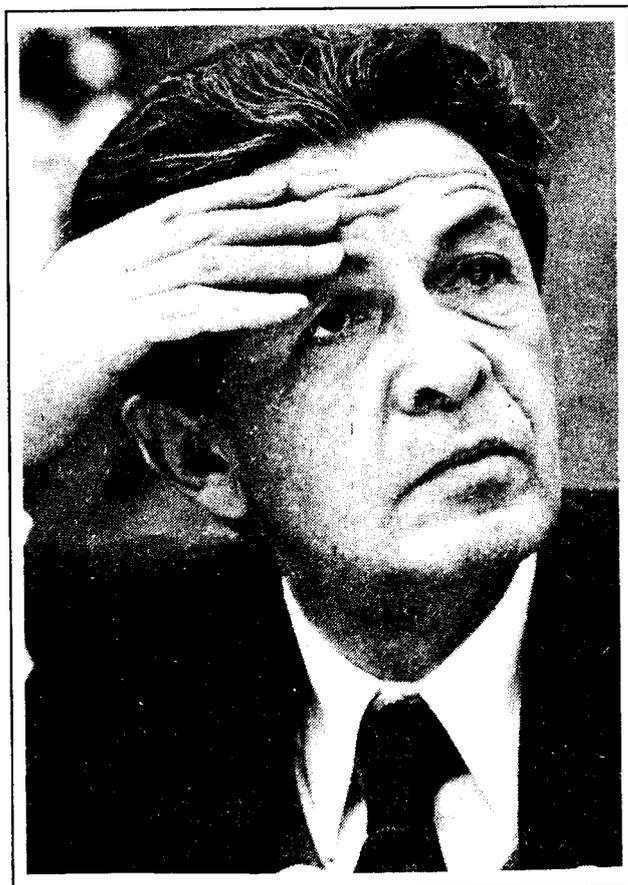


LA HERENCIA VIVA DE ALLENDE

Enrico Berlinguer. Secretario General de Partido Comunista Italiano, notable aporte a la renovación del pensamiento marxista en nuestro tiempo.



Me parece que este aniversario debiera sugerir una reflexión que trascienda el homenaje a la memoria de Salvador Allende para tratar de recoger —con el alcance que tuvieron las elecciones presidenciales de 1970— el significado total de su vida, su obra, su muerte y, también, el sentido de la herencia que él ha dejado a su propio pueblo y a quienes, en el mundo entero y a través de las vías más diferentes, luchan por la libertad y la justicia. Con este ánimo quisiera participar, aun cuando sea mediante alusiones necesariamente breves, a la celebración del aniversario.

El 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular a las elecciones de Presidente de la República de Chile, obtuvo el 36.42 % de los votos, seguido del candidato del Partido Nacional, Jorge Alessandri, con el 34.9% y de Radomiro Tomic, candidato del PDC, con el 27.8% de los sufragios. Según la norma constitucional, el 24 de octubre siguiente, el Senado y la Cámara de Diputados se reunieron en el Congreso para elegir el Presidente entre los depositarios de la “primera” y la “segunda” mayoría:

Allende visto por sus contemporáneos. Casa de Chile, México, 1983.

resultó elegido Salvador Allende, incluso con el voto decisivo del grupo de los parlamentarios demócratacristianos (más consistente en número que los grupos de la izquierda).

Ante el resultado de las urnas del 4 de septiembre, se habló de casualidad, de “ruleta rusa”, en los cuocientes electorales; mientras que la decisión demócratacristiana en el Congreso fue reducida a mero saludo a la tradición, que ha visto siempre en la historia la elección del candidato que consigue la 1a. mayoría de los escrutinios: juicios no sólo mordaces, sino superficiales, puramente formales. En realidad, el voto popular y la decisión del Congreso, por una parte, constituyen el índice de la profundidad de la crisis que afligía a Chile mientras que, por otro lado, señalaban la perspectiva de la superación.

La crisis venía de lejos, de las estructuras socioeconómicas del país, y de sus relaciones internacionales. Desencadenada a comienzos de los años 60, ya la crisis se mostraba no superable en el cuadro del viejo Estado “liberal” a la vigilia de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1964, a cuyas características hay que volver para entender lo que sucedió en Chile entre septiembre y octubre, seis años después.

A comienzos de 1964, el Frente de Acción Popular — formado por comunistas y socialistas— con su ramificación orgánica, su programa electoral y la candidatura de Salvador Allende, pareció constituir la salida del gran movimiento que atravesaba a la sociedad chilena, de lucha contra la degradación de la economía, la miseria generalizada, el desorden institucional, por un profundo cambio revolucionario del orden social.

Agilmente, la clase dominante advirtió que la vetusta organización electoral mediante la cual había mantenido el poder hasta entonces (clubes, notables, organizaciones clientelares, etc.) no habría podido resistir al empuje popular. Con una decisión imprevista y sin precedentes —probablemente no sólo en Chile— ella retiró el apoyo a Julio Durán y se volcó al apoyo incondicional a Eduardo Frei, al candidato del PDC que había entrado en liza enarbolando el estandarte de la “revolución en libertad”.

Mientras la competencia electoral procedía, el bipolismo se exasperó al extremo: sostenido por la fragorosa formación de la derecha interna e internacional, el 4 de septiembre de 1964 Eduardo Frei fue elegido Presidente con el 56%, una mayoría absoluta en la cual las inquietudes, la aspiración sincera de cambio de una parte tan notable de la ciudadanía chilena en torno a la “revolución en libertad”, se mezclaron a la maniobra de los enemigos jurados de la libertad —como así de la revolución— terminando por serles subalternas (como los hechos sucesivos se encargarían de demostrar).

El candidato liberal-conservador recogió los votos de pocos íntimos; el porcentaje de 39% obtenido por Salvador Allende atestiguó la profundidad y la vitalidad de las raíces de la izquierda obrera que, no obstante, fue derrotada en el choque frontal al cual se vio forzada.

El proyecto reformista del cual el PDC se había constituido en portador, fue asumido como una tentativa de mediación entre las contradicciones que habían puesto en crisis al Estado “liberal”, y no obstante su organicidad, sus fundamentos teóricos, sus enlaces internacionales, comenzó a deteriorarse a partir del primer período de la Presidencia de Frei.

Cierto que aquí es imposible recorrer los seis años en los cuales el “primer presidente democratacristiano de América Latina” día tras día debió amainar el estandarte de su elección.

Baste decir que a cada iniciativa suya los “grandes electores”: que habían patrocinado su ascenso respondieron presentándole la cuenta: así ocurrió cuando fue aprobada la ley de reforma agraria, a la cual los latifundistas opusieron resistencia, sea desde dentro de la mayoría como de fuera, volviendo incierta su aplicación (mientras que a la ley de sindicalización de las masas campesinas —prohibida hasta la fecha por el Estado “liberal”— ellos reaccionaron inclusive con el asesinato de militantes democratacristianos). Lo mismo ocurrió y en escala bastante más compleja cuando Frei, respecto a las intenciones programáticas, debió redimensionar el proyecto de “chilenización” de las minas de cobre (explotadas hasta entonces por las gigantescas compañías transnacionales —la Anaconda, la Kennecott, etc.—), que mantenía sustancialmente intactos el poder y las ganancias (con la represión, también sangrienta, de las huelgas de los mineros). Mientras la política exterior de la presidencia democratacristiana, aun cuando estaba dirigida a la diversificación de las relaciones internacionales, políticas y económicas, de Chile (la reanudación de las relacio-

nes con la URSS, búsqueda de acuerdos con la CEE, constitución del Pacto Andino, etc.) chocó con la barrera opuesta por parte de Estados Unidos, que redujo a contradictorias veleidades los enunciados de Frei sobre la soberanía nacional, expresados cada vez con menor convicción.

En los seis años de experimento gubernativo el PDC (que en la victoria de septiembre de 1964 había sido orgullosamente presentado como la alternativa al orden existente y al así llamado “castrismo” y destinado a durar hasta el fin del siglo y a expandirse en escala continental) se puso en evidencia cuán exiguos o inexistentes eran los márgenes de modernización de un orden social que, en cambio, debía ser atacado y renovado en profundidad; cuán precarias y destinadas a la derrota eran las posibilidades de modificación meramente cuantitativa de las relaciones que volvían a Chile subalterno del imperialismo estadounidense y que, en cambio, debían ser refundadas sobre bases cualitativamente nuevas y paritarias.

La política de la izquierda obrera, encarnada en la unidad entre socialistas y comunistas, mantenida en lo sustancial aun cuando eran frecuentes los momentos de debate y polémica durante los años de la presidencia de Frei, fue de firme oposición en el país y en el Parlamento y, en todo caso, dirigida siempre a estimular en las filas del PDC el respeto a los compromisos asumidos en 1964 y a perfilar incansablemente la perspectiva en la cual se pudieran reconocer y sumar las fuerzas populares que sinceramente habían aspirado a la revolución en libertad.

En el Parlamento, comunistas y socialistas rechazaron siempre, incluso para la elección de Salvador Allende a Presidente del Senado, toda convergencia de votos con la derecha (que estaba tomando distancia del PDC bajo la consigna de “tanto peor, tanto mejor”); mientras la Central Unica de Trabajadores, la CUT, que tantas huelgas había promovido contra las vacilaciones, los aplazamientos y las medidas antipopulares de Frei, en 1969 movilizó a las masas en un Paro General en apoyo del Gobierno y la República, amenazados por el levantamiento del Regimiento Tacna, encabezado por el general Viaux, rechazando así la tentación “peruana” (a la cual por un momento parecieron ceder algunos exponentes socialistas) a sabiendas de que dicho atajo, en el contexto histórico-político chileno, habría conducido indefectiblemente a la aventura reaccionaria.

El reformismo del PDC, al chocar con la “fuerza objetiva de las cosas”, había comenzado pronto a disgregarse, pero la política de la izquierda obrera, a fuerza de su dinámica unitaria, constituyó el factor subjetivo de mayor relieve a efectos de dar razones y soluciones a la crisis de orientación y de dirección que caracterizó la vida del partido de gobierno en el sexenio de la presidencia de Frei. La dialéctica interna del PDC, entre debates elevados, golpes de efecto del Presidente, vuelcos de la mayoría, permaneció viva, se tornó convulsionada hasta la división de 1969, que dio origen al MAPU: expresión de la bifurcación entre la originaria expresión del partido y la praxis gubernativa, de las oscilaciones de la base social del partido (“clase media”, en primer lugar), pero así mismo, repetimos, de la fuerza de sugestión de la proposición que desde la oposición, nunca dejó de manifestar la izquierda obrera, respecto del empanamiento de la “revolución en libertad”.

La derecha se organizó en el Partido Nacional; en torno a los comunistas y socialistas nació la Unidad Popular que comprendía al Partido Radical y al MAPU, el más antiguo y el más joven partido de la historia chilena, con un



programa de cambios revolucionarios de la sociedad. No obstante la escisión a la izquierda, el PDC acentuó su batalla contra las fuerzas conservadoras que, desde el fracaso del reformismo demócratacristiano, concebían la arrogante previsión de que estaba por sonar la hora de su regreso.

La polarización de centro-derecha de 1964 no había resistido al esfuerzo que recorría cada fibra de Chile y cada una de sus instituciones, inclusive la Iglesia que en la inminencia de las elecciones presidenciales proclamó la propia neutralidad (mientras un consistente sector del clero, en todo nivel de jerarquía, descendería después en campo en apoyo de la Unidad Popular).

La campaña electoral de 1970 señaló de este modo la repetición del esquema tripolar de competición (izquierda, centro, derecha) y esto no significaba que la situación fuese más relajada que en 1964, sino al contrario. El deterioro del sistema político-social que la mediación reformista no había resuelto, en esa ocasión tocó el vértice, proponiendo la elección última, a estas alturas ya sin cobertura.

La victoria de Allende del 4 de septiembre de 1970 (por estrechísimo margen sobre la candidatura de la derecha, que se reveló muy fuerte) pasó a través de la brecha abierta en la formación que seis años atrás había sido un solo bloque en torno a Frei: ¡nada de "ruleta rusa" de los cuocientes electorales!

Después de una campaña electoral conducida prevalentemente contra la derecha, al abrirse las urnas Radomiro Tomić fue a abrazar a Allende, mientras en las calles de Santiago y de otras ciudades chilenas, militantes de la Unidad Popular y del PDC se mezclaban en manifestaciones de conmovida exaltación. Esto es lo que está detrás de la elección de Salvador Allende: ¡una cosa muy diversa, como salta a la vista, del obsequio a la tradición!

He aquí por qué he afirmado al comienzo que el voto del 4 de septiembre y la decisión del Parlamento del 24 de octubre constituyeron un índice de la crisis de la sociedad y del Estado y, al mismo tiempo, la hipótesis de la superación de la misma.

La derecha oligárquica, subalterna del imperialismo y

por tanto el "enemigo principal", había sido aislada. De aquí su derrota.

Ciertamente, ni definitiva ni irrevocable, como se puso de inmediato en evidencia en esos días que todavía recuerdo como si fuese ayer: la fuga de capitales de Chile, las medidas restrictivas inmediatamente puestas en ejecución por parte de las instituciones financieras internacionales, los anuncios amenazadores del embajador estadounidense en Santiago. Después, dos días antes de la reunión del Congreso, la tentativa de secuestro del general Rene Schneider, Comandante del Ejército (votante declarado de Jorge Alessandri, pero soldado leal a la Constitución que había garantizado la lealtad de las fuerzas armadas en la transmisión del mando), su resistencia a los criminales y su feroz asesinato. No se trataba de coletazos, de simples episodios, sino de la batalla de retaguardia del enemigo en derrota. Desde el sabotaje económico a la conspiración terrorista, desde la esfera interna al ajedrez internacional, el enemigo se revelaba listo a conducir implacablemente su acción de asedio y de subversión contra el nuevo cuadro histórico-político que la clase obrera chilena había configurado con el ascenso a la cumbre del Estado de Salvador Allende, después de largos decenios de lucha por la conquista o la reconquista de los derechos democráticos y del sistemático ejercicio de los mismos.

Primer presidente socialista

El "Primer Presidente Socialista" del continente del Sur del Canal de Panamá constituía el símbolo del torturado camino del proletariado y de los trabajadores chilenos, porque de tal modo su vida se había vuelto un todo con su propia historia y con la historia de su patria.

Participó muy joven en la fundación del PS, en 1933, fue deportado por dos años y luego ministro del gobierno del Frente Popular que, bajo la presidencia del radical Agui-

rrer Cerda, colocó a Chile dentro del gran movimiento mundial contra el fascismo y la guerra.

Fue sin interrupción parlamentario de la República, y desde los bancos del Senado condujo en los años de la guerra fría, la batalla contra la ley maldita que había puesto fuera de la ley a los comunistas (con persecuciones y campos de concentración).

En 1952 había aceptado ser su candidato a la Presidencia de la República, desafiando incluso la prohibición del grupo dirigente socialista, obteniendo el 4% de los votos que seis años después (reconquistada la legalidad del PC chileno y reiniciada la dialéctica sindical y política en el país) subieron a un porcentaje capaz de permitirle una gran afirmación como candidato una vez más de socialistas y comunistas, otra vez unidos, en las elecciones presidenciales de 1958.

He aquí la primera y constante peculiaridad del pensamiento y la acción de Salvador Allende: la conciencia acerca del origen común de los dos partidos, de su común misión histórica, factible apenas ellos lograsen consolidar ininterrumpidamente la propia unidad, dentro del respeto a la recíproca autonomía y de sus diversas características, formadas durante las vicisitudes de la nación chilena.

Luis Emilio Recabarren, apóstol, organizador, combatiente revolucionario que desde principios de siglo había recorrido el territorio chileno, desde los desiertos del norte al extremo austral, conociendo todas las cárceles, imprimiendo periódicos, predicando y actuando por el nacimiento del sindicato unitario de clase, había fundado en 1912 el Partido Obrero Socialista.

En 1922 éste se transformó bajo su guía en el Partido Comunista, manteniendo viva en su caracterización programática la intuición de su fundador: que por la historia misma de la patria correspondía al proletariado chileno la misión de avanzar hacia el socialismo en la unión más amplia de fuerzas y en la batalla por la defensa y la incesante expansión de la democracia.

En la década sucesiva tal impostación se ofuscó dentro del PCCCh (también a consecuencia de las críticas dirigidas a la obra de Recabarren por parte del Cominterm) y precisamente por la contracción sectaria que en esos años conocieron los comunistas y del espacio político que ella abrió, nació el Partido Socialista.

Pero tanto en este período de resquemores como en los largos años sucesivos de creciente entendimiento y luego de unidad en la acción de los partidos Comunista y Socialista, Salvador Allende se remitió a la herencia de Luis Emilio Recabarren como fuente y origen de inspiración para ambos partidos, hasta poner la enseñanza del fundador del movimiento obrero chileno al centro de su discurso cuando el 4 de noviembre de 1970 asumió el poder de Presidente de la República de Chile, delante de cientos de miles de ciudadanos y de las representaciones diplomáticas de todo el mundo, convocados a la ceremonia de "transmisión de mando".

Creo que el secretario del PCCCh., el compañero Luis Corvalán, ha captado bien esta peculiaridad del pensamiento y de la acción de Allende cuando respondió a un periodista que lo entrevistaba en 1972:

... Durante muchos años Salvador Allende ha sido defensor del principio de la unidad popular y ha realizado un gran trabajo de educación política de las masas chilenas. También, por lo menos durante veinte años y en forma permanente, ha descollado en el esfuerzo de volver conscientes a las masas

acerca de la importancia de los cambios revolucionarios, por la solución real de los problemas del pueblo y de la nación...

Inspiración unitaria, fe en los trabajadores, firmeza en la enunciación de objetivos, eran algunos de los rasgos característicos del Compañero Presidente, que pudieron manifestarse desde los primeros días de la asunción a su alto cargo, después de una victoria cuyas peculiaridades y problemática no debían escapar entonces, como tampoco hoy, a una reflexión desapasionada.

La victoria no había sido conquistada ni con las armas ni con la mayoría en el país y en el Parlamento, sino por la división de la formación que sólo seis años antes se había mostrado férreamente compacta.

Había obtenido la Unidad Popular, no para gobernar lo existente, sino en un programa de lucha contra las viejas y nuevas estructuras de la dependencia y el subdesarrollo, por el renovamiento del sistema político cuya crisis había sido agudizada por la intervención reformista y, por lo tanto, para echar las bases mediante las cuales iniciar la edificación de la sociedad socialista, según los tiempos que el proceso histórico habría señalado.

Era un programa de transición cuya proyección internacional se precisaba en el compromiso de actuar la política de no alineación necesaria y a la vez posible en virtud de los cambios en ejecución, sea en escala continental o a nivel mundial, con el avance de la política de coexistencia pacífica y en la derrota, que ya se perfilaba, de la agresión estadounidense al Vietnam. Con dicho programa la Unidad Popular había conquistado, en el ámbito de la anterior legalidad, el Ejecutivo, una de las posiciones fundamentales del poder político, pero no la única, no obstante la preeminencia que le otorgó la República Presidencial chilena (baste considerar a propósito el poder del Parlamento —donde la Unidad Popular permanecía en minoría— de censurar al Ejecutivo y destituir al gobierno).

La contradicción —que se encarnaba en el Compañero Presidente, supremo aval de la legalidad vigente y líder del movimiento popular para su profunda renovación— podía resolverse en la medida que la Unidad Popular hubiese logrado mantener aislado al "enemigo principal", por un lado y, por el otro, fundir en la sociedad la alianza entre las masas inorgánicas, el proletariado y las capas medias (además de mantener en el Parlamento un entendimiento mínimo entre las fuerzas que habían elegido a Salvador Allende). Así, la realización del programa habría dado origen al nacimiento de una mayoría social —antes que electoral— o sea, la formación de un "bloque histórico" que —en su proceso de desarrollo— iba a fundar la nueva legalidad, la nueva democracia chilena.

A esta tarea árdua y hasta el presente no experimentada, Salvador Allende dirigió su sagacidad, su vigor, siempre en el respeto real de las "reglas del juego" heredadas del pasado.

El comienzo de la realización del programa señaló etapas de notable relieve en esta dirección. La aceleración en la actuación de la reformá agraria, la nacionalización de las minas de cobre en julio de 1971 y, dos meses, después, la incautación de todas las propiedades de la International Telephone and Telegraph Co. —la ITT— sorprendida con las manos en la masa de la conspiración subversiva, se dieron sobre la base de un amplísimo consenso en el país y en el Parlamento. Contemporáneamente el Gobierno inició una inmediata e incisiva redistribución de las rentas que, con el fuerte aumento del poder adquisitivo de las masas popula-



res, debía determinar la salida del anterior empantanamiento del aparato productivo, hacia el empleo pleno y la reanudación de las inversiones masivas.

El año 1971 fue de éxitos en ambas líneas de iniciativa del Gobierno, la estructural y la de alianzas; sin embargo a la expansión comenzaron a entrelazarse síntomas negativos que ya en 1972 empezaron a prevalecer con la explosión vertical de la inflación (cuya tasa de incremento había sido reducida notablemente el año anterior).

He dicho ya que estaría fuera de lugar tratar de recorrer en detalle el arco de los acontecimientos que habían hecho madurar la victoria del Gobierno de Unidad Popular en septiembre-octubre de 1970; tanto menos puedo aquí profundizar el análisis de la dinámica especial y política que se cerró tres años después, el día 11 de septiembre.

Pero para entender sus grandes líneas hace falta también recordar las condiciones del país que la administración de Allende había heredado de la anterior: terrible mortalidad infantil, subutilización del aparato productivo, 8% de cesantía en la población activa, una deuda externa equivalente a 3 mil 900 millones de dólares, emigración caótica desde el campo, un tercio de la población viviendo en tugurios, tasa de inflación igual a 36% anual.

En tales condiciones la actuación programática del Gobierno de Allende se realizó con éxito en 1971 y esto a su vez extendió, aceleró la movilización social del proletariado y de las grandes masas sin trabajo, del subproletariado que ejercía una presión tanto incontenible como inorgánica (carente en verdad de organización y representación sindical). En el otro polo de la sociedad estaba la exigua minoría oligárquica estrechamente aliada (y subordinada) a las centrales del poder económico y financiero internacional. El bloque de poder herido por el programa estructural y coyuntural de la Unidad Popular pasó inmediatamente al contrataque, con una agresión económica que incidió sobre todo en el diseño del gobierno, cada día y sin pausa. No se trataba sólo del complot subversivo de la CIA, denunciado por sus mismos organizadores a la comisión del Senado estadounidense después del escándalo de Watergate, sino de otra cosa bien distinta y aún más peligrosa.

Baste recordar que los latifundistas del sur, al “acercar-

se” la reforma agraria, respondieron a menudo vendiendo el ganado, trasladándolo a Argentina (o incluso destruyendo los rebaños).

Baste recordar la caída vertical del precio del cobre (de 64 a 48 centavos de dólar por libra) en el mercado mundial, que siguió inmediatamente a la nacionalización y a la maniobra dirigida por las grandes compañías estadounidenses para el embargo del cobre, ahora propiedad del Estado chileno. Baste pensar en el bloqueo del crédito internacional (iniciado con el rechazo por parte del Exim-Bank estadounidense de un crédito ya decidido en favor de Chile por 21 Millones de dólares, el 15 de agosto de 1971) generalizado hasta la denegación de refinanciar su deuda externa y de la concesión de nuevos préstamos. Ciertamente sería bien “ingenuo” esperar del adversario respeto por los principios, los valores, las aspiraciones, de los cuales la Unidad Popular era portadora, en una suerte de duelo leal entre caballeros antiguos. Más bien habría que preguntarse si el gobierno tomó en cuenta de manera adecuada el poder aplastante que la incógnita de la dependencia habría podido jugar, en caso de ser maniobrada despiadadamente —como en realidad ocurrió— por la coalición imperialista-oligárquica, considerando la extrema debilidad de los centros autónomos de acumulación o sea el carácter dependiente de la economía de Chile.

Es un hecho que en 1972 el rebrote de la inflación tuvo consecuencias devastadoras, sea en la esfera psicológica como en la objetiva, sobre todo para las “clases medias”, de fuerte peso numérico y cultural —otra peculiaridad de la sociedad chilena— que después de la oscilación a la izquierda de los años anteriores comenzaron a tomar distancias del gobierno (en divergencia siempre más abierta respecto de la movilización social de las masas populares y subproletarias), encabezadas ahora por los gremios de categoría del terciario y de los profesionales liberales que en ellos se habían organizado. En rápida progresión, ellos fueron reabsorbidos por el contrataque del polo oligárquico-imperialista.

Dadas las distorsiones y la dependencia estructural de la economía chilena, dada la inmensa distancia entre la meta de la superación del subdesarrollo y la limitación de los

medios a disposición del gobierno para afrontar la realidad, ¿era inevitable esa divergencia? ¿inevitable que ella se transformase en antagonismo?

Rechazar simplificaciones

Toda simplificación determinista debe ser rechazada. De la esfera de la producción, de la economía, hay que llegar a la esfera más propiamente político-parlamentaria, captando las interacciones, los condicionamientos recíprocos. Aquí surge la pregunta acerca de las relaciones entre la Unidad Popular y el PDC. Este aprobó las medidas fundamentales y estructurales del gobierno en 1971, se alineó con él contra el embargo proclamado por la Kennecott y la Anaconda aún en septiembre de 1972, pero al mismo tiempo utilizó todos los medios para oponerse y debilitarlo, desde el paralizante obstruccionismo parlamentario al desencadenamiento de todos los medios de comunicación de masa que tenía en sus manos, con una ensordecedora campaña de terrorismo ideológico.

El PDC trató de fomentar las desesperadas necesidades de los "marginales"; infló las reivindicaciones económicas de algunos grupos de obreros de las empresas nacionalizadas (¡obviamente!), pero sobre todo movilizó a los colegios profesionales de las "clases medias", en conjunto con el Partido Nacional, con el cual compartía su dirección en la casi totalidad.

El Viraje del centro

El desplazamiento a la derecha del PDC fue determinado entonces por un proceso complicado a lo largo del cual se percibían sus tentativas de confirmar su propia identidad ideal, puntualmente en contradicción con el comportamiento práctico. La continua oscilación entre atisbos de búsqueda de un entendimiento con la Unidad Popular y la decisión de nuevos embates de oposición frontal: así el PDC sufría y, dialécticamente, promovía la orientación de las "clases medias" en la dinámica de la lucha política y de clase durante esos años. En marzo de 1971 el Consejo Nacional del PDC reafirmó solemnemente el carácter "socialista comunitario, pluralista y democrático del partido" renovando la explícita declaración del propio interés en el éxito de la obra del gobierno; un año después, en octubre de 1972, en relación directa con el Partido Nacional, apoya el famoso: "paro general de los camioneros", arma de choque en el ataque a la economía y a la autoridad del Estado.

Son múltiples los factores que jugaron en dicho vuelco, desde la falta de rotura profunda con la derecha al revanchismo de Frei, de la miope ilusión de poder volver a la cumbre del poder, al carácter subalterno respecto del acentuarse de las presiones imperialistas, al prevalecer la línea integralista sobre el "sentido del Estado" (que en cambio en 1969 había alineado a la izquierda en sostén del presidente Frei, con motivo del levantamiento militar). No me corresponde analizar todos estos factores en toda su complejidad y gravedad. Ciertamente pesaron también los errores de la izquierda. Me refiero también a la acción de los grupúsculos de ultraizquierda, bien poca cosa dentro de la amplitud del proceso de reforma que se realizaba en el respeto riguroso de las libertades cívicas y de las leyes vigentes (aun

cuando tales acciones, dilatadas instrumentalmente por la red de comunicaciones de masa produjeron gran confusión en la opinión pública). Pero más perniciosas políticamente fueron las consecuencias que actitudes respecto del PDC, en la espiral de las reacciones emotivas tomaron pie en algunos sectores de la Unidad Popular: rechazo de acuerdos que podían perfilarse (convergiendo paradójicamente en ello con el ultrancismo de la derecha del PDC) según aceres teorizaciones que concluían por considerar a la izquierda demócratacristiana como la más peligrosa cobertura ideológica de la coalición oligárquico-imperialista.

En mayo de 1972 Luis Corvalán debió manifestar en una conferencia de prensa de amplia resonancia que "los comunistas no pueden considerar fascistas a los demócratacristianos, ni regalarlos al fascismo".

En este terreno los comunistas estuvieron siempre completamente con Salvador Allende. Creo que se debe recordar su batalla, lúcida hasta el final, en la amargura de no ser comprendido siempre por algunos sectores de la Unidad Popular, por dejar abierta la vía de la reanudación de la alianza político social que solamente habría podido volver irreversible la victoria nacida del entendimiento de septiembre-octubre de 1970, aun cuando sea bajo las tormentosas dificultades de la situación cargada de ambigüedades, de contradicciones, de dilemas desgarradores, así como se había ido perfilando (necesariamente diría, dadas las premisas) en el período sucesivo.

Batalla entretejida de iniciativas sin interrupción, la de Allende, unida a la inmensa capacidad de sacrificio de los trabajadores, permitió a la Unidad Popular poder salir significativamente de la trinchera en la cual estaba siendo progresivamente constreñida en actitud defensiva, después de las grandes reformas.

Recuerdo, entre todas, el llamado al general Prats y de otros militares constitucionalistas al gobierno, en octubre de 1972, ante el paro de los camioneros. No quiero ni puedo detenerme aquí a discutir si la opinión según la cual las fuerzas armadas chilenas, en cuanto cuerpo que por su propio estrecho profesionalismo debían ser consideradas indefectible garantía del cuadro constitucional, no constituyera un reflejo ideológico de la imagen de dicha institución que la clase dominante había difundido en el modo de pensar del país y también en la izquierda obrera. Tal vez, con ese llamado de los militares al Gobierno, Salvador Allende pensó que ellos podían asumir el rol de suplencia y de garantía respecto de las "clases medias", que la oposición demócratacristiana y reaccionaria estaba movilizándose contra el Estado. Y tal llamado habría tenido probablemente validez estratégica siendo actuado, no ya como expediente de estabilidad temporal hasta las elecciones legislativas del 4 de marzo de 1973, sino como momento de revivir la línea nacional, de alianza democrática, que había constituido el eje de la victoria popular de 1970.

Las elecciones se celebraron dentro del orden. Ellas se caracterizaron por la subida de la Unidad Popular del 36% de 1970 al 44% de la votación: éxito extraordinario alcanzado en las condiciones de hiperinflación (un punto de aumento al día), de la escasez, la bolsa negra, la aguda tensión político-social. El PDC y el PN, concentrados en lista única para arrebatar la mayoría de dos tercios necesaria para derrocar al Presidente, habían fracasado en su objetivo y, juntos, no habían totalizado los votos recogidos tres años antes por Tomic y Alessandri.

Pero el examen analítico del voto demostró cuán pro-

funda y vertical era la división que existía en el país: los barrios proletarios y de pobres habían votado masivamente por la Unidad Popular, los de “clase media”, de la oligarquía y la mayoría de las regiones agrarias habían votado por el bloque PDC-PN. Se puso en evidencia así el cerco en torno a la Unidad Popular; el fin del esquema tripolar de la lucha política, pero con la radicalización del centro ya no más en torno de la ilusión reformista de la “revolución en libertad” de 1964, sino bajo la guía de la extrema derecha (interna y exterior al PDC) ya desencadenada para derrocar a Salvador Allende a cualquier precio.

En ese momento sobre la onda del aumento del consenso, ¿habría podido la iniciativa de la Unidad Popular reabrir el juego, despedazar el cerco, consciente también del necesario repliegue para salvar lo esencial? La historia no está escrita con el “si condicional”.

En la realidad, no obstante la aspiración de Salvador Allende, los militares debieron dejar el Gobierno; la alta oficialidad reaccionaria se encontró en posición de mayor autoridad respecto de los generales constitucionalistas, mientras la totalidad de los acontecimientos volvió a la institución aún más sensible al chantaje de la derecha, al flagelo de la inflación, a la pérdida de poder por parte del Estado sobre la sociedad civil, atacada de fiebre, atravesada por las correrías y los atentados de las bandas fascistas, siempre reforzadas.

Cuando los generales fueron llamados al gobierno en los meses sucesivos, no habían cambiado ciertamente las intenciones del Presidente y la lealtad de Prats. No se puede decir lo mismo de la ubicación de las fuerzas armadas en el contexto de la crisis, ya galopante hacia el epílogo, y de la relación entre los oficiales constitucionalistas y los golpistas que se enfrentaban más o menos abiertamente dentro de la institución.

El “factor internacional” venía adquiriendo peso siempre más notable. Las relaciones con Cuba seguían fraternales, buenas con Perú, México, Venezuela, Panamá. El provechoso restablecimiento de las relaciones con los países socialistas, desde la URSS a la China, continuaba desde 1970. Pero en 1971 el gobierno progresista de Juan José Torres, después de menos de un año de existencia, había sido ya derribado sangrientamente; en los primeros meses de 1973 la Argentina era presa de la convulsión del retorno de Juan Domingo Perón, el Uruguay se estaba precipitando en la dictadura militar y en el Brasil de entonces la represión no tenía tregua. Y sobre todo, el asedio económico-político de las compañías transnacionales y de los Estados Unidos se estaba volviendo asfixiante, colaborando a la disgregación en marcha de la sociedad chilena.

Los comunistas lanzan y lanzan llamados, reconocen errores de sectarismo cometidos por la Unidad Popular, sostienen la necesidad del diálogo con la DC, para intentar un acuerdo que esboce la reorganización de la economía y salve el cuadro democrático. La mayoría de la dirección del Partido Socialista contraponen en cambio la necesidad de “avanzar sin transigir”. Pero los llamados no se traducen en acciones y quien desea avanzar permanece detenido.

El PDC, presa de una avasalladora crisis de identidad, cabalga el tigre de la subversión (mientras los mejores dirigentes de su izquierda, tres años antes mayoritaria y ahora derrotada y en silencio, tratan de tomar contacto con el ala más abierta de la Unidad Popular, con el empeño también del Episcopado chileno, con un método de encuentros privados que ya no tiene incidencia alguna con respecto de la

inminente erupción). El 7 de septiembre Allende denuncia por la radio la amenaza de la guerra civil y llama a todas las fuerzas políticas a un entendimiento para salvar a Chile de la catástrofe.

En noviembre de 1973 en una reunión secreta del PDC, Radomiro Tomic dirá, condenando como injustificable el golpe de estado del 11 de septiembre:

... En Chile no había una tiranía. El Parlamento funcionaba, criticaba y destituía ministros, el poder judicial podía afrontar abiertamente al Ejecutivo y así lo hizo durante meses hasta la caída del gobierno; la prensa, la radio y la televisión de la oposición atacaban al gobierno sin tregua y —como hicieron repetidas veces— podían llegar a promover la movilización contra el gobierno, el levantamiento de las fuerzas armadas. Todo esto ocurría mientras de una parte y de la otra se desgranaba un rosario de injurias, de calumnias; se sucedían huelgas, cierres, ocupaciones, y los desfiles de protesta no eran patrimonio exclusivo de la Unidad Popular sino, sobre todo en los últimos meses, eran aprovechados por parte de grupos y partidos de oposición en forma jamás vista antes en Chile.

Esta es la verdad. Ciertamente la libertad no era amenazada por el gobierno. En cambio, atacado por el enemigo en todos los frentes, extenuado por la iniciativa pasada a manos enemigas, sin interrupción, después de las elecciones de marzo de 1973, ulteriormente debilitado por las divergencias emergidas en su seno, éste había entrado en la etapa de “navegación a vista”, perdiendo la dirección de la sociedad chilena.

Pérdida de la hegemonía

La Unidad Popular había perdido la batalla por la hegemonía sobre el proceso de movilización de la sociedad, abierta en septiembre de 1970; el PDC había terminado por reducirse a correa de transmisión de la influencia oligárquico-imperialista sobre las “clases medias”.

En el país dividido en dos, el golpe de estado fue la conclusión militar de la contrarrevolución que, bajo la guía de Salvador Allende, la Unidad Popular había resistido por dos años, antes de la derrota política.

El Presidente había tratado de evitar la catástrofe hasta el final, hasta el último milímetro de espacio disponible. Bernardo Leighton, límpida figura de demócratacristiano, quedó sumergido por las convulsiones esquizofrénicas que habían arrastrado a su partido en los últimos meses y dirá en una entrevista ofrecida en Roma, poco tiempo antes de caer gravemente herido, junto a su esposa, por mano de los asesinos venidos de Santiago (los mismos verdugos del compañero socialista Orlando Letelier, en Washington, y del general Prats, en Buenos Aires) el 15 de julio de 1974:

El 11 de septiembre de 1973 se impusieron la furia y la violencia que echaron a tierra la democracia en Chile. Las mentes desesperadas a las cuales les faltó el coraje de contribuir a poner fin o por lo menos a aliviar los graves tormentos del pueblo chileno en el cuadro de la democracia, aplicaron ese día la ley del más fuerte, la ley de la selva. Nosotros, en cambio, que siempre habíamos tenido fe en la eficacia de la razón y de la fraternidad humana estábamos llegando a acuerdos precisos con Salvador Allende, pero esa triste mañana fuimos derrotados. Derrotados, pero no vencidos...

¡Exacto! En “esa triste mañana”, Salvador Allende fue asesinado por Judas sin honor ni gloria, capaces solamente de traicionar. Otros fueron los vencidos: los que esperaban

que el gobierno les fuera entregado por parte de las instituciones. En cambio los traidores, derrumbando el sistema político e instaurando su dictadura, por una parte han acabado con las ciegas, mezquinas ilusiones del viejo personal conservador, reaccionario, transformista, por la otra han puesto implacablemente a la luz la esencia de la alternativa que la crisis del Estado liberal hasta 1964 había propuesto al pueblo chileno. O la democracia, de salvar mediante su profunda renovación y esto a través de la unidad del proletariado y su entendimiento con las "clases medias", o el fascismo en versión criolla

La herencia de Allende

¿Cuál es la herencia que Salvador Allende ha entregado a su patria y a todos nosotros?

La herencia ideal, moral y política de Salvador Allende creo que es tan elevada como compleja. Querría individualizar solamente dos aspectos.

El *primero* concierne a la batalla por la conquista de la soberanía de Chile, que él supo conducir en el terreno del derecho internacional así como con la movilización de las mejores energías chilenas, con inteligencia de la historia, noción de las posibilidades y los límites puestos por las fuerzas en campo, parangonables a la energía de su capacidad de operación.

Recorriendo el texto de sus escritos y discursos, examinando las fórmulas legislativas pertinentes a la nacionalización del cobre, que llevan el sello de sus concepciones, se percibe cuán aguda fue en él la conciencia de que la afirmación del poder del Estado-nación del Tercer Mundo en un sistema internacional que apuntaba —y apunta— a situarse más allá de las soberanías nacionales (sobre todo a través de la expansión de las sociedades transnacionales) debía ocurrir con el nacimiento de nuevas normas de derecho internacional contextuales al ejercicio pleno del derecho del Estado a las propias riquezas, sus propios recursos: manifestación primera de la soberanía nacional.

Hay que releer el discurso pronunciado por Salvador Allende en la tribuna de las Naciones Unidas el 4 de diciem-

bre de 1972, que ha quedado como uno de los momentos más altos de la historia de la ONU, por el respiro universal de aquella exposición, por el calor de la interminable manifestación de aplauso y de consenso que saludó a las conclusiones.

... Debíamos acabar con la situación de que nosotros, los chilenos, debatiéndonos contra la pobreza y el estancamiento, tuviéramos que exportar enormes sumas de capital, en beneficio de la más poderosa economía de mercado del mundo. La nacionalización de los recursos básicos constituía una reivindicación histórica. Nuestra economía no podía tolerar por más tiempo la subordinación que implicaba tener más del 80% de sus exportaciones en manos de un reducido grupo de grandes compañías extranjeras, que siempre han antepuesto sus intereses a las necesidades de los países en los cuales lucrando a cabo, el progresivo papel de dirección que en ella asumen los trabajadores, la recuperación nacional de las riquezas básicas, la liberación de nuestra patria de la subordinación a las potencias extranjeras, son la culminación de un largo proceso histórico. Del esfuerzo por imponer las libertades políticas y sociales, de la heroica lucha de varias generaciones de obreros y campesinos por organizarse como fuerza social... Hemos nacionalizado las riquezas básicas. Hemos nacionalizado el cobre... Queremos que todo el mundo lo entienda claramente: no hemos confiscado las empresas extranjeras de la gran minería del cobre. Eso sí, de acuerdo con disposiciones constitucionales, reparamos una injusticia histórica, al deducir de la indemnización las utilidades por ellas percibidas más allá de un 12% anual, a partir de 1955. Las utilidades que habían obtenido en el transcurso de los últimos quince años algunas de las empresas nacionalizadas eran tan exorbitantes que, al aplicársele como límite la utilidad razonable del 12% anual, esas empresas fueron afectadas por deducciones de significación.

Tal es el caso, por ejemplo, de una filial de Anaconda Company, que entre 1955 y 1970, obtuvo en Chile una utilidad promedio del 21.5% anual sobre su valor de libro, mientras las utilidades de Anaconda en otros países alcanzaban solo un 3.6% al año. Esta es la situación de una filial de Kennecott Copper Corporation que en el mismo período obtuvo en Chile una utilidad promedio del 52% anual... El promedio de las utilidades de Kennecott en otros países alcanzaba, en la misma época, a menos del 10% anual... Cabe destacar que en los años inmediatamente anteriores a la nacionalización, las

L'Unità

Giornale
del Partito
comunista
italiano

grandes empresas del cobre habían iniciado planes de expansión los que en gran medida han fracasado, y para los cuales no aportaron recursos propios, no obstante las grandes utilidades que percibían, y que financiaron a través de créditos externos. De acuerdo con las disposiciones legales, el Estado chileno ha debido hacerse cargo de esas deudas, las que ascienden a la enorme cifra de más de 727 millones de dólares. Hemos empezado a pagar incluso deudas que una de estas empresas había contratado con Kennecott, su compañía matriz en Estados Unidos. Estas mismas empresas, que explotaron el cobre chileno durante muchos años, sólo en los últimos cuarenta y dos años se llevaron en ese lapso más de cuatro mil millones de dólares de utilidades, en circunstancias que su inversión inicial no subió de treinta millones... Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra, sin bandera, con armas poderosas... Su influencia y su campo de acción están trastocando las prácticas tradicionales del comercio entre los Estados, de transferencia tecnológica, de transmisión de recursos entre las naciones y las relaciones laborales. Estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales —políticas, económicas y militares— por organizaciones globales que no dependen de ningún Estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada... El portavoz del Grupo Africano, al anunciar en la Junta de Comercio y Desarrollo, hace algunas semanas, la posición de estos países frente a la denuncia que hizo Chile por la agresión de la Kennecott Copper, declaró que su Grupo se solidarizaba plenamente con Chile, porque no se trataba de una cuestión que afectara sólo a una nación, sino que potencialmente a todo el mundo en desarrollo. Esas palabras tienen un gran valor, porque significan el reconocimiento de todo un continente, de que a través del caso chileno está planteada una nueva etapa de la batalla entre el imperialismo y los países débiles del Tercer Mundo. La batalla por la defensa de los recursos naturales es parte de la que libran los países del Tercer Mundo para vencer el subdesarrollo.

En esa lucha, él, su gobierno, su patria quedaron derrotados. La derrota, no vale esconderlo, fue tremenda, y sin embargo, fue derrota en la inmediatez de la lucha en la cual los gigantes tuvieron a su lado la razón de la fuerza más despiadada: pero las ideas y los logros que Salvador Allende expuso desde la tribuna de la ONU ¡qué camino han recorrido en lo más profundo de las relaciones económicas y políticas internacionales y en el escenario del mundo contemporáneo!

Merece recordarse lo siguiente: en septiembre de 1973, cuando él cayera asesinado en Santiago de Chile, la 4a. Conferencia cumbre del Movimiento de los Países No Alineados adoptó en Alger la plataforma que constituiría el gran instrumento para la acción de la OPEP; el 12 de diciembre de 1974 la Asamblea General de la ONU votó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados (mérito histórico de México, sobre todo, que lo asumió como tarea propia y fundamental); el 12 de octubre de 1979, desde la misma tribuna de Naciones Unidas, el presidente del Movimiento de los Países No Alineados, que algunas semanas antes había celebrado su 6a. Cumbre, el compañero Fidel Castro, expuso el balance de las innumerables necesidades, de las tempestades enfrentadas pero también de los triunfos logrados por el Tercer Mundo, que en la década de los 70 ha subido definitivamente al escenario entre los que protagonizan la historia universal.

Ahora bien, en esa plataforma, en la “Carta” y en el ba-

lance del Tercer Mundo, se percibe también la huella dejada por el pensamiento y la obra del pueblo chileno tal como quedaron expresados por el Presidente Allende, con su línea ganadora en el plano histórico —pese a la derrota en lo inmediato— en defensa de la soberanía nacional, para el rescate de los continentes ex coloniales.

Por otro lado, en el “Informe de la Comisión Independiente” sobre los problemas del desarrollo que presidiera Willy Brandt, se puede apreciar cuánto la inspiración de Salvador Allende ha penetrado en la reflexión que las mentes más esclarecidas del occidente capitalista están desarrollando hoy en día alrededor de las exigencias que hay que enfrentar orgánicamente para alcanzar la liberación de los pueblos, del atraso, del hambre, de la vieja y nueva dependencia.

Hoy, en estos mismos días, la comunidad internacional en su foro más representativo —la ONU— está debatiendo el tema de la estrategia para la “Tercera década del desarrollo”, mientras el horizonte mundial está cargado de tensiones, de nubes que amenazan el porvenir de la humanidad. La lucha para el desarme y la lucha para el desarrollo —en su más amplia significación— aparecen y son los momentos, los rieles esenciales de cara a la perspectiva de la superación de la crisis actual, camino de la coexistencia y de la paz.

Reclamos del Tercer Mundo

En lo que se refiere al desarrollo del Tercer Mundo, se trata de conquistar relaciones de igualdad con los países de adelantada industrialización y con los países socialistas, que permitan negociaciones equilibradas y un reparto también equilibrado de las ventajas que de cada acuerdo se derivan.

Se trata de definir reglas comunes que tomen en cuenta efectivamente el *handicap* inicial del que adolecen los países más débiles que no disponen, de partida, del potencial tecnológico, financiero, administrativo —y muchas veces ni de recursos naturales, siquiera— para negociar sobre una base de igualdad con los *partners* más poderosos.

En una palabra, la lucha de hoy es para la realización procesal de un nuevo ordenamiento mundial fundado en la cooperación paritaria, como condición y marco referencial para el desarrollo económico del Tercer Mundo. Lucha notable, hay que estar plenamente conscientes de eso, que no admite alternativas que no sean catastróficas: ella supone grandes movimientos de masas, decisiones responsables de Estados —empezando por los más poderosos— y el desplegarse de ideas de contenido universal, que no se queden sin embargo en la esfera flotante de las promesas y de las intenciones, sino que cristalicen en debates definidos, en soluciones específicas que tengan fuerza de normativa jurídica internacional.

Uno de estos debates que se están desarrollando en la actualidad, atañe a la definición de la noción de “justo precio” y de “justo provecho”, esencial para la finalización del Código de conducta de las compañías transnacionales que debería constituir uno de los cimientos del nuevo orden económico y político mundial.

Ahora bien, fue mérito precioso de Salvador Allende, a la cabeza del gobierno de la Unidad Popular, el haber abstraído por primera vez la noción de “justo provecho” del

contexto ético-religioso medieval, precapitalístico, en que nació, para instalarlo como principio jurídico internacional: con la ley de nacionalización del cobre chileno que fija en el 12% anual los márgenes de provecho reconocido a las compañías que habían explotado las minas, sustrayendo de la indemnización debida a raíz de la nacionalización, lo que ellas habían percibido más allá de ese *plafond* (individualizado de acuerdo con cálculos económicos por que no hay por qué mencionar aquí).

De ahí uno de los aspectos de la herencia viva que Salvador Allende nos ha entregado. Y otro, de valor inconmensurable, también. He dicho que en septiembre-octubre de 1970, al ser elegido Presidente de Chile, Salvador Allende asumió un papel bivalente.

Por un lado él debía ser el supremo garante de la "legalidad" vigente; por otro, él era el líder del movimiento popular encaminado a cambiar de raíz esa legalidad.

He añadido que esa contradicción objetiva pudo haberse superado en la medida en que la Unidad Popular hubiese hecho más sólida y estable la alianza social y política entre pobres, proletariado, capas medias, en la actuación del programa de renovación nacional. No lo logró, sobre todo a raíz del poder agobiante del enemigo y también porque, bajo el peso de su ataque, perdió el sentido del camino unitario que le había permitido alcanzar el gobierno.

Salvador Allende murió ejerciendo su papel de magistrado supremo de una legalidad pisoteada por traidores, por fascistas; luchando con el valor de un joven soldado de la revolución de un peón de Emiliano Zapata, de un guerrillero de la Sierra Maestra: magistrado y soldado de la democracia.

He allí el mensaje de consecuencia intelectual, ética, política que sigue manando desde aquella "triste mañana": aquí está en primer lugar la explicación de las razones profundas por las cuales, diez años después de su elección, siete años después de su asesinato —en un mundo en que todo parece desteñirse a raíz de la sucesión de los acontecimientos cada vez más convulsa, de la presión de los massmedia, de la explosión de "grandes cinismos"— el nombre de Salvador Allende sigue alentando la misma emoción, sigue solicitando viva e incesante la solidaridad con el pueblo chileno y el rechazo de la acomodación con los asesinos.

Verdad que su muerte mereció por parte de Henry Kissinger el comentario: "América Latina ha sido refrigerada", que nos libra de todo comentario.

Sin embargo, un peso moral infinitamente superior tiene la ruptura de las relaciones que el presidente López Portillo, con decisión digna de la historia de México, quiso reiterar años atrás respecto de los predones que ocupan el poder en Santiago de Chile.

El comentarista malévolo podría insinuar que tal ruptura corresponde a la amistad que Salvador Allende supo ganarse en México. En realidad, en su discurso en las Naciones Unidas que citamos con anterioridad, dijo:

... es imposible describir el apoyo profundo, firme afectuoso que me han brindado el gobierno y el pueblo mexicano. He recibido tales demostraciones de solidaridad por parte del presidente Echeverría, del Parlamento, de las universidades y sobre todo del pueblo que sigo todavía afectado y emocionado.

El mismo comentarista podría argumentar sobre la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Italia y Chile (cuestión que hace honor a la República Italiana nacida de la Resistencia) y que ese estado de cosas se debe a la fuer-



za de la izquierda obrera, laica y católica de mi país. Y todo esto es indudablemente cierto. Pero ¿qué decir de la afrenta hecha por el Presidente de Filipinas hace pocos meses al Presidente-traidor de Chile, devuelto a casa sin ser siquiera recibido? ¿No ha sido esa una prueba concluyente — otorgada por un bando más allá de toda sospecha— de la fuerza de la herencia que Salvador Allende ha dejado y, de otra parte, del aislamiento ignominioso del régimen actual, sobre el cual deberían reflexionar los hombres de las fuerzas armadas chilenas realmente preocupados del interés nacional?

Chile dominado por la regresión

Lo se bien yo, y la emoción y la esperanza no deben atenuar ese juicio, que el camino de la vuelta a la democracia en Chile será una tarea probablemente larga, y ciertamente, no fácil.

El país está dominado por la regresión; ingresan capitales extranjeros; se moderniza tal o cual estructura productiva. A pesar de la protesta del cardenal Silva Henríquez, la única voz que puede hablar a nombre de quienes fueron y son obligados a sufrir en silencio, a pesar de la oposición y de la resistencia de las fuerzas que rechazan la rendición y que, desafiando la represión más dura, mantienen encendida en las vanguardias la voluntad de cambio, el país parece haber vuelto a los años posteriores a la “contrarrevolución oligárquica”, cuando, después de la muerte del presidente Balmaceda, el banquero E. Matte, en 1892, podía escribir en el diario *El Pueblo*: “los patrones de Chile somos nosotros, los patrones del capital y de la tierra; los demás son masa influenciada y vendible, que no cuenta ni como opinión ni como prestigio”.

Pero el mundo moderno es atravesado por las tres revoluciones: la nacional, la social, la tecnológica; a pesar de las tensiones y de las amenazas a la paz, las fuerzas que trabajan por la soberanía, la justicia, la cooperación paritaria entre los Estados, pueden prevalecer. También en Chile, como en América Latina, donde a pesar de la resaca de los años 70, a pesar de la permanencia de tantos regímenes abominables, los cambios de signo positivo continúan abriéndose camino, muchas veces por caminos desconocidos, sorprendentes por su misma originalidad.

Son caminos siempre duros para los pueblos que los protagonizan, sembrados de mártires, de hombres ilustres como Salvador Allende, como Ernesto Guevara, como el general Juan José Torres, como Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, como el obispo Arnulfo Romero, o menos conocidos e ignorados co-

mo las decenas y decenas de miles de campesinos, obreros, estudiantes, intelectuales, soldados, sacerdotes, políticos, periodistas que en estos últimos años han caído en América Latina. Cada uno alimentando el sacrificio del otro y, juntos, la incansable movilización de los pueblos.

Una italiana, Anna Borhini, viuda del alcalde de la ciudad de Guatemala, el social demócrata Emanuel Colón Arguetas, asesinado el año pasado por un homicida a sueldo de la reacción desencadenada en ese país, vuelta a Florencia, su ciudad natal, fue elegida regidora por el P. C. I. en las elecciones administrativas de junio pasado. Los compañeros de nuestra organización en Florencia nos cuentan cómo ella recuerda frecuentemente que uno de los factores que más influyeron en su esposo para asumir posiciones de lucha abierta contra las tiranías fue, precisamente, la reflexión sobre el ejemplo que Salvador Allende había dado a cada ciudadano de América Latina.

¿No se percibe acaso en el sustrato ideológico de los combatientes que hace un año derrocaron en Nicaragua la satrapía de los Somoza y que hoy guían su patria en pluralismo y libertad hacia la reconstrucción y la realización de un destino digno para su pueblo, junto a la gran estampa de César Augusto Sandino, la enseñanza específica del pensamiento de Salvador Allende, además del fermento de su ejemplo moral?

Por otra parte, querido senador Miranda, junto con agradecerle sinceramente el que haya pedido este testimonio, así como también a la editorial que lo publicará, yo querría hacer una última consideración.

El diario francés *Le Monde*, en un servicio del 5 de julio desde Sao Paulo, Brasil, refiriéndose al encuentro entre Juan Pablo II y la enorme multitud reunida para saludarlo, más de un millón de ciudadanos, señala que entre los slogans predominantes en la manifestación se veía aquel que fue bandera de las esperanzas chilenas: “El pueblo unido jamás será vencido”.

Salvador Allende y sus compañeros no lograron traducirlo en la realidad, pero sirviéndolo con todas sus fuerzas, hasta la muerte, no solamente rindieron un trágico testimonio de su verdad, sino que lo escribieron, indeleble, en el ánimo de las masas, lo sembraron en la corriente viva de la historia. Antes que nada de América Latina.

De tal modo que hoy, recordando a Salvador Allende, creo se puede repetir lo que Pablo Neruda escribió a la muerte de José Carlos Mariátegui, el genial pensador marxista peruano: sentimos que Salvador Allende no es una memoria, sino “presencia invisible”, presencia operante en nuestras conciencias y en la realidad del proceso histórico contemporáneo.